Autoridad Nacional del Servicio Civil Tribunal del Servicio

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

RESOLUCIÓN № 000759-2021-SERVIR/TSC-Segunda Sala

EXPEDIENTE: 1000-2021-SERVIR/TSC

IMPUGNANTE : TEODORO JOSE QUIÑONES SANCHEZ **ENTIDAD** : INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR

RÉGIMEN: DECRETO LEGISLATIVO № 728

MATERIA : RÉGIMEN DISCIPLINARIO

SUSPENSIÓN POR TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365)

DÍAS SIN GOCE DE REMUNERACIONES

SUMILLA: Se declara la NULIDAD de la Carta Nº 01-SCPO-DIDAECCV-DIR-INCOR-ESSALUD-2021, del 21 de enero de 2021, y de la Resolución de Oficina de Gestión de Recursos Humanos Nº 001-DIR-INCOR-ESSALUD-2021, del 2 de marzo de 2021, emitidas por la Jefatura del Servicio Perioperatorio y la Jefatura de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, respectivamente, del Instituto Nacional Cardiovascular; por haberse vulnerado el principio de tipicidad y el debido procedimiento administrativo.

Lima, 30 de abril de 2021

ANTECEDENTES

Con Informe de precalificación Nº 23-ST-PAD-DIR-INCOR-ESSALUD-2020, el Secretario Técnico de Procedimientos Administrativos Disciplinarios del Instituto Nacional Cardiovascular, en adelante la Entidad, recomendó a la Jefatura del Servicio Perioperatorio iniciar procedimiento administrativo disciplinario, al señor TEODORO JOSE QUIÑONES SANCHEZ, Médico del Servicio de Cardiología Perioperatoria, en adelante el impugnante, porque presuntamente no habría respetado en reiteradas oportunidades el aislamiento voluntario al cual se acogió el 17 de marzo de 2020, mediante declaración jurada, en mérito al estado de emergencia declarado por el Gobierno Central, toda vez que el domingo 22 de marzo de 2020 fue detenido conjuntamente con otros dirigentes en plena conferencia de prensa, el 25 de abril publicó en el SINAMSOOP-ESSALUD, una foto donde sale conjuntamente con el congresista de iniciales J.L.P.F. informando que han presentado el proyecto de Ley 5070/2020, el 27 de abril participó activamente del plantón realizado por el Sindicato SINAMSSOP del cual forma parte en la puerta principal del Hospital Luis Negreiros ubicado en la Provincia Constitucional del Callao y el 29 de abril, en su calidad de Secretario General del Sindicato, presentó una denuncia ante el Ministerio Público en la que acusa a la Presidenta Ejecutiva de la Entidad por presunto abandono o exposición al contagio y muerte;



por tales motivos, se le imputó el haber realizado un uso indebido de la licencia con goce de haber, la cual le fue otorgada por ser un trabajador con factores de riesgo.

- 2. Con Carta Nº 01-SCPO-DIDAECCV-DIR-INCOR-ESSALUD-2021, del 21 de enero de 2021¹, la Jefatura del Servicio Perioperatorio de la Entidad resolvió iniciar procedimiento administrativo disciplinario contra el impugnante por los hechos señalados en el informe de precalificación; en virtud de ello, le imputaron la infracción del principio de probidad y el deber de responsabilidad, contemplados en el numeral 2 del artículo 6º y el numeral 6 del artículo 7º de la Ley Nº 27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública², y la comisión de la falta tipificada en el literal q) del artículo 85º de la Ley Nº 30057 Ley del Servicio Civil³, en concordancia con lo establecido en el artículo 100º del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM⁴.
- 3. El 25 de enero de 2020, el impugnante presentó sus descargos, manifestando lo siguiente:

El servidor público actúa de acuerdo a los siguientes principios: (...)

2. Probidad

Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por interpósita persona".

"Artículo 7º.- Deberes de la Función Pública

El servidor público tiene los siguientes deberes: (...)

6. Responsabilidad

Todo servidor público debe desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, asumiendo con pleno respeto su función pública. (...)".

"Artículo 85º.- Faltas de carácter disciplinario

Son faltas de carácter disciplinario que, según su gravedad, pueden ser sancionadas con suspensión temporal o con destitución, previo proceso administrativo:

q) Las demás que señale la ley".

También constituyen faltas para efectos de la responsabilidad administrativa disciplinaria aquella previstas en los artículos 11.3, 12.3, 14.3, 36.2, 38.2, 48 numerales 4 y 7, 49, 55.12, 91.2, 143.1, 143.2, 146, 153.4, 174.1, 182.4, 188.4, 233.3 y 239 de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General y en las previstas en la Ley Nº 27815, las cuales se procesan conforme a las reglas procedimentales del presente título".



¹ Notificada al impugnante el 22 de enero de 2021.

² Ley № 27815 – Ley del Código de Ética de la Función Pública

[&]quot;Artículo 6º.- Principios de la Función Pública

³ Ley № 30057 - Ley del Servicio Civil

⁴ Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo № 040-2014-PCM "Artículo 100º.- Falta por incumplimiento de la Ley № 27444 y de la Ley № 27815

- (i) Es médico asistencial y a su vez fue elegido como Secretario General del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú SINAMSSOP, por lo tanto, cuenta con libertad sindical para ejercer la acción representativa de sus agremiados.
- (ii) La restricción de no salir del domicilio tiene la excepción de volver a trabajar siempre y cuando exista la manifestación de voluntad expresada en la exoneración de responsabilidad del empleador, siendo esta excepción también aplicable a su persona como Secretario General del sindicato, por ende, tiene la prerrogativa no solo a licencia sindical sino a la protección ante cualquier limitación de sus funciones.
- (iii) Los medios probatorios que sustentan el inicio del procedimiento disciplinario ratifican que en su condición de Secretario General ha venido realizando sus funciones de dirigente gremial y no utilizó indebidamente la licencia otorgada.
- (iv) Se vulneró el principio de tipicidad porque los hechos descritos no tienen relación con las normas supuestamente vulneradas.
- 4. Con el Informe № 0001-SCPO-DIDAECCV-DIR-INCOR-ESSALUD-2021, del 15 de febrero de 2021, la Jefatura del Servicio Perioperatorio de la Entidad recomendó a la Jefatura de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos sancionar al impugnante con suspensión por trescientos sesenta y cinco (365) días sin goce de remuneraciones, al encontrarse acreditado los hechos imputados mediante la Carta № 01-SCPO-DIDAECCV-DIR-INCOR-ESSALUD-2021.
- 5. Mediante Resolución de Oficina de Gestión de Recursos Humanos Nº 001-DIR-INCOR-ESSALUD-2021, del 2 de marzo de 2021⁵, la Jefatura de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la Entidad resolvió imponer al impugnante la medida disciplinaria de suspensión por trescientos sesenta y cinco (365) días sin goce de remuneraciones, atribuyéndole la infracción del principio de probidad y el deber de responsabilidad contemplados en la Ley Nº 27815, incurriendo en la comisión de la falta tipificada en el literal q) del artículo 85º de la Ley Nº 30057, en concordancia con lo establecido en el artículo 100º del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil.

TRÁMITE DEL RECURSO DE APELACIÓN

6. El 8 de marzo de 2021, el impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Oficina de Gestión de Recursos Humanos № 001-DIR-INCOR-ESSALUD, solicitando se declare la nulidad de la misma, precisando esencialmente, los siguientes argumentos:



⁵ Notificada al impugnante el 3 de marzo de 2021.

- (i) Se vulneró el debido procedimiento porque no existió una imputación objetiva.
- (ii) Se vulneró su derecho de defensa porque en el informe del órgano instructor se ampliaron los cargos comunicados al inicio del procedimiento administrativo disciplinario.
- (iii) La licencia con goce de haber implica una suspensión imperfecta de labores, donde el trabajador no tiene la obligación de prestar servicios, en ese sentido, el empleador no puede exigir al trabajador el cumplimiento de sus funciones durante el periodo de licencia, ni mucho menos sancionarlo por no realizar las mismas.
- (iv) Se vulneró el principio de tipicidad porque la falta imputada resulta ser genérica e imprecisa y el supuesto incumplimiento de aislamiento voluntario no está tipificado como falta.
- 7. Con Oficio № 65-DIR-INCOR-ESSALUD-2021, la Dirección de la Entidad remitió al Tribunal del Servicio del Servicio Civil, en adelante el Tribunal, el recurso de apelación presentado por el impugnante, así como los antecedentes del acto impugnado.
- 8. Mediante Oficios Nº 002415-2021-SERVIR/TSC y 002416-2021-SERVIR/TSC, el Tribunal informó al impugnante y a la Entidad, respectivamente, que el recurso de apelación había sido admitido.

ANÁLISIS

De la competencia del Tribunal del Servicio Civil

9. De conformidad con el artículo 17º del Decreto Legislativo № 10236, modificado por la Centésima Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley № 29951 -



⁶ Decreto Legislativo № 1023 - Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos

[&]quot;Artículo 17º .- Tribunal del Servicio Civil

El Tribunal del Servicio Civil - el Tribunal, en lo sucesivo - es un órgano integrante de la Autoridad que tiene por función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior del Sistema.

El Tribunal es un órgano con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. Conoce recursos de apelación en materia de:

a) Acceso al servicio civil;

b) Pago de retribuciones;

c) Evaluación y progresión en la carrera;

d) Régimen disciplinario; y,

e) Terminación de la relación de trabajo.



Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013⁷, el Tribunal tiene por función la resolución de controversias individuales que se susciten al interior del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, en las materias: acceso al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario y terminación de la relación de trabajo; siendo la última instancia administrativa.

- 10. Asimismo, conforme a lo señalado en el fundamento jurídico 23 de la Resolución de Sala Plena № 001-2010-SERVIR/TSC8, precedente de observancia obligatoria sobre competencia temporal, el Tribunal es competente para conocer en segunda y última instancia administrativa los recursos de apelación que sean presentados ante las entidades a partir del 15 de enero de 2010, siempre y cuando, versen sobre las materias establecidas descritas en el numeral anterior.
- 11. Posteriormente, en el caso de las entidades del ámbito regional y local, el Tribunal asumió, inicialmente, competencia para conocer los recursos de apelación que correspondían sólo a la materia de régimen disciplinario, en virtud a lo establecido en el artículo 90º de la Ley № 30057 – Ley del Servicio Civil⁹, y el artículo 95º de su reglamento general, aprobado por Decreto Supremo № 040-2014-PCM¹⁰; para

El Tribunal constituye última instancia administrativa. Sus resoluciones podrán ser impugnadas únicamente ante la Corte Superior a través de la acción contenciosa administrativa.

Por decreto supremo refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros, previa opinión favorable de la Autoridad, se aprobarán las normas de procedimiento del Tribunal".

7 Ley № 29951 - Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 **DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES**

"CENTÉSIMA TERCERA.- Deróguese el literal b) del artículo 17 del Decreto Legislativo № 1023, Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos".

La suspensión sin goce de remuneraciones se aplica hasta por un máximo de trescientos sesenta y cinco (365) días calendario previo procedimiento administrativo disciplinario. El número de días de suspensión es propuesto por el jefe inmediato y aprobado por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces, el cual puede modificar la sanción propuesta. La sanción se oficializa por resolución del jefe de recursos humanos o quien haga su veces. La apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio

La destitución se aplica previo proceso administrativo disciplinario por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces. Es propuesta por el jefe de recursos humanos o quien haga sus veces y aprobada por el titular de la entidad pública, el cual puede modificar la sanción propuesta. Se oficializa por resolución del titular de la entidad pública. La apelación es resuelta por el Tribunal del Servicio Civil".

10Reglamento de la Ley № 30057, aprobado por Decreto Supremo № 040-2014-PCM

"Artículo 95º.- Competencia para el ejercicio de la potestad disciplinaria en segunda instancia De conformidad con el artículo 17 del Decreto Legislativo Nº 1023, que crea la Autoridad del Servicio Civil, rectora del sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, la autoridad competente



⁸ Publicada en el Diario Oficial El Peruano el 17 de agosto de 2010.

⁹ Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil

[&]quot;Artículo 90º.- La suspensión y la destitución

Tribunal del Servicio

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres" "Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

aquellos recursos de apelación interpuestos a partir del 1 de julio de 2016, conforme al comunicado emitido por la Presidencia Ejecutiva de SERVIR y publicado en el Diario Oficial "El Peruano" 11, en atención al acuerdo del Consejo Directivo del 16 de junio de 2016.

12. Sin embargo, es preciso indicar que a través del Comunicado de SERVIR publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 29 de junio de 2019, en atención a un nuevo acuerdo de su Consejo Directivo¹², se hizo de público conocimiento la ampliación de competencias del Tribunal en el ámbito regional y local, correspondiéndole la atención de los recursos de apelación interpuestos a partir del lunes 1 de julio de 2019, derivados de actos administrativos emitidos por las entidades del ámbito regional y local, en lo que respecta al resto de materias: acceso al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera, y terminación de la relación de trabajo; esto

para conocer y resolver el recurso de apelación en materia disciplinaria es el Tribunal del Servicio Civil, con excepción del recurso de apelación contra la sanción de amonestación escrita, que es conocida por el jefe de recursos humanos, según el artículo 89 de la Ley.

La resolución de dicho tribunal pronunciándose sobre el recurso de apelación agota la vía administrativa".

"Artículo 16º.- Funciones y atribuciones del Consejo Directivo

Son funciones y atribuciones del Consejo Directivo:

- a) Expedir normas a través de Resoluciones y Directivas de carácter general y/o de alcance nacional;
- b) Aprobar las normas de desarrollo del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos;
- c) Aprobar la política general de SERVIR;
- d) Aprobar el Presupuesto Institucional, los Estados Financieros, el Balance General, el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Institucional;
- e) Aprobar la organización interna de SERVIR, el funcionamiento del Consejo Directivo y el desarrollo de las funciones de las gerencias y de órganos que se requieran para el ejercicio de sus funciones, dentro de los límites que señala la ley y el Reglamento de Organización y Funciones;
- f) Emitir interpretaciones y opiniones vinculantes en las materias comprendidas en el ámbito del sistema;
- g) Designar y remover, a propuesta del Presidente Ejecutivo de SERVIR, al Gerente General de SERVIR, en los términos que apruebe el Consejo, y aprobar las incorporaciones por concurso público y desvinculaciones de los demás Gerentes, Directores y Jefes;
- h) Aprobar la designación, previo concurso público, aceptar la renuncia y aprobar la remoción de los vocales del Tribunal del Servicio Civil;
- i) Aprobar la creación de Salas del Tribunal del Servicio Civil;
- j) Proponer el Texto Único de Procedimientos Administrativos;
- k) Supervisar la correcta ejecución técnica, administrativa, presupuestal y financiera de la institución;
- I) Disponer la intervención de las Oficinas de Recursos Humanos de las entidades públicas; y,
- m) Las demás que se señalen en el Reglamento y otras normas de desarrollo del Sistema."



¹¹El 1 de julio de 2016.

¹²Decreto Legislativo № 1023 - Decreto Legislativo que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, modificado por el Decreto Legislativo № 1450

es, asumió la totalidad de su competencia a nivel nacional, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:

COMPETENCIAS DEL TRIBUNAL DEL SERVICIO CIVIL			
2010	2011	Recursos de apelación interpuestos a partir del	Recursos de apelación interpuestos a partir del
		1 de julio de 2016	1 de julio de 2019
PRIMERA SALA Gobierno Nacional (todas las materias)	AMBAS SALAS	AMBAS SALAS	AMBAS SALAS Gobierno Nacional y Gobierno Regional y Local (todas las materias)
	Gobierno	Gobierno Nacional	
	Nacional	(todas las materias)	
	(todas las	Gobierno Regional y Local	
	materias)	(solo régimen disciplinario)	

- 13. Por tal razón, al ser el Tribunal el único órgano que resuelve la segunda y última instancia administrativa en vía de apelación en las materias de acceso al servicio civil, evaluación y progresión en la carrera, régimen disciplinario y terminación de la relación de trabajo en los tres (3) niveles de gobierno (Nacional, Regional y Local), con la resolución del presente caso asume dicha competencia, pudiendo ser sus resoluciones impugnadas solamente ante el Poder Judicial.
- 14. En ese sentido, considerando que es deber de todo órgano decisor, en cautela del debido procedimiento, resolver la controversia puesta a su conocimiento según el mérito de lo actuado; y, habiéndose procedido a la admisión del recurso de apelación y valoración de los documentos y actuaciones que obran en el expediente, corresponde en esta etapa efectuar el análisis jurídico del recurso de apelación.

Del régimen disciplinario aplicable

- 15. Mediante la Ley № 30057 Ley del Servicio Civil, publicada el 4 de julio de 2013 en el Diario Oficial "El Peruano", se aprobó un nuevo régimen del servicio civil para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado y aquellas que se encuentran encargadas de su gestión, con la finalidad de alcanzar mayores niveles de eficacia y eficiencia, así como prestar efectivamente servicios de calidad a la ciudadanía, promoviendo además el desarrollo de las personas que lo integran.
- 16. Al respecto, en el Título V de la citada Ley, se establecieron las disposiciones que regularían el régimen disciplinario y el procedimiento sancionador, las mismas que conforme a lo dispuesto por la Novena Disposición Complementaria Final de la Ley



del Servicio Civil, serían aplicables una vez que entre en vigencia la norma reglamentaria sobre la materia¹³.

- 17. Es así que, el 13 de junio de 2014, se publicó en el Diario Oficial "El Peruano" el Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, aprobado por Decreto Supremo № 040-2014-PCM, en cuya Undécima Disposición Complementaria Transitoria¹⁴ se estableció que el título correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento sancionador entraría en vigencia a los tres (3) meses de su publicación, es decir, a partir del 14 de septiembre de 2014.
- 18. En ese sentido, a partir del 14 de septiembre de 2014, resultan aplicables las disposiciones establecidas en el Título V de la Ley del Servicio Civil y el Título VI del Libro I de su Reglamento General, entre los que se encontraban comprendidos aquellos trabajadores sujetos bajo los regímenes de los Decretos Legislativos NººS 276, 728 y 1057, estando excluidos sólo los funcionarios públicos que hayan sido elegidos mediante elección popular, directa y universal, conforme lo establece el artículo 90º del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil¹⁵.

a) (...) Las normas de esta ley sobre la capacitación y la evaluación del desempeño y el Título V, referido al régimen disciplinario y procedimiento sancionador, se aplican una vez que entren en vigencia las normas reglamentarias de dichas materias, con excepción de lo previsto en los artículos 17º y 18º de esta ley, que se aplican una vez que se emita la resolución de inicio del proceso de implementación. (...)".

¹⁴Reglamento General de la Ley № 30057, aprobado por el Decreto Supremo № 040-2014-PCM DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

"UNDÉCIMA.- Del régimen disciplinario

El título correspondiente al régimen disciplinario y procedimiento sancionador entra en vigencia a los tres (3) meses de publicado el presente reglamento con el fin que las entidades adecuen internamente al procedimiento.

Aquellos procedimientos disciplinarios que fueron instaurados con fecha anterior a la entrada en vigencia del régimen disciplinario de la Ley 30057 se regirán por las normas por las cuales se les imputó responsabilidad administrativa hasta su terminación en segunda instancia administrativa".

¹⁵Reglamento General de la Ley № 30057, aprobado por el Decreto Supremo № 040-2014-PCM "Artículo 90º.- Ámbito de Aplicación

Las disposiciones de este Título se aplican a los siguientes servidores civiles:

- a) Los funcionarios públicos de designación o remoción regulada, con excepción del Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, el Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Jefe del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, los miembros del Directorio del Banco Central de Reserva y el Superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
- b) Los funcionarios públicos de libre designación y remoción, con excepción de los Ministros de Estado. c) Los directivos públicos;



¹³ Ley № 30057 - Ley del Servicio Civil DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES "NOVENA.- Vigencia de la Ley

- 19. En concordancia con lo señalado en el numeral precedente, a través de la Directiva № 02-2015-SERVIR/GPGSC "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley № 30057, Ley del Servicio Civil", aprobada por Resolución de Presidencia Ejecutiva № 101-2015-SERVIR-PE, y modificada por Resolución de Presidencia Ejecutiva № 092-2016-SERVIR-PE, se efectuaron diversas precisiones respecto al régimen disciplinario y el procedimiento sancionador regulado en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, señalando en su numeral 4.1 que dichas disposiciones resultaban aplicables a todos los servidores y ex servidores de los regímenes regulados por los Decretos Legislativos Nos 276, 728, 1057 y Ley № 30057¹⁶.
- 20. Por tanto, a partir del 14 de septiembre de 2014 resultan aplicables las normas previstas en el Título V de la Ley del Servicio Civil y el Título VI del Libro I de su Reglamento General, a todos los servidores y ex servidores comprendidos bajo los regímenes laborales de los Decretos Legislativos Nos 276, 728 y 1057.
- 21. Por su parte, respecto a la vigencia del régimen disciplinario y el procedimiento administrativo disciplinario, en el numeral 6 de la Directiva № 02-2015-SERVIR/GPGSC, se estableció cuales debían ser las normas que resultaban aplicables atendiendo al momento de la instauración del procedimiento administrativo, para lo cual se especificó los siguientes supuestos:
 - (i) Los procedimientos administrativos disciplinarios instaurados antes del 14 de septiembre de 2014, se rigen por las normas sustantivas y procedimentales vigentes al momento de la instauración del procedimiento hasta la resolución de los recursos de apelación que, de ser el caso, se interpongan contra los actos que ponen fin al procedimiento.

"4. ÁMBITO

4.1 La presente directiva desarrolla las reglas procedimentales y sustantivas del régimen disciplinario y procedimiento sancionador y es aplicable a todos los servidores y ex servidores de los regímenes regulados bajo los Decretos Legislativos 276, 728, 1057 y Ley № 30057, con las exclusiones establecidas en el artículo 90 del Reglamento. (...)".



d) Los servidores civiles de carrera;

e) Los servidores de actividades complementarias y

f) Los servidores de confianza.

Los funcionarios públicos de elección popular, directa y universal se encuentran excluidos de la aplicación de las disposiciones del presente Título. Su responsabilidad administrativa se sujeta a los procedimientos establecidos en cada caso".

¹6Directiva № 02-2015-SERVIR/GPGSC - "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley № 30057, Ley del Servicio Civil", aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva № 101-2015-SERVIR-PE

- (ii) Los procedimientos administrativos disciplinarios instaurados desde el 14 de septiembre de 2014, por hechos cometidos con anterioridad a dicha fecha, se rigen por las reglas procedimentales previstas en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, y por las reglas sustantivas aplicables al momento en que se cometieron los hechos.
- (iii) Los procedimientos administrativos disciplinarios instaurados desde el 14 de septiembre de 2014, por hechos cometidos a partir de dicha fecha, se regirán por las normas procedimentales y sustantivas sobre régimen disciplinario previstas en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General.
- (iv) Si en segunda instancia administrativa o en la vía judicial se declarase la nulidad en parte o de todo lo actuado, el procedimiento se regiría por las reglas procedimentales previstas en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General, y por las reglas sustantivas aplicables al momento en que se cometieron los hechos.
- 22. Respecto a las reglas procedimentales y sustantivas de la responsabilidad disciplinaria, corresponde señalar que en el numeral 7 de la Directiva Nº 02-2015-SERVIR/GPGSC¹⁷, se especificó qué normas serían consideradas procedimentales y sustantivas, conforme a continuación se detalla:
 - (i) <u>Reglas procedimentales</u>: Autoridades competentes, etapas y fases del procedimiento administrativo, plazos y formalidades de los actos procedimentales, reglas sobre actividad probatoria y ejercicio del derecho de defensa, medidas cautelares y plazos de prescripción.

"7. REGLAS PROCEDIMENTALES Y REGLAS SUSTANTIVAS DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA

Se considera como normas procedimentales y sustantivas, para efectos de los dispuesto en el numeral 6 de la presente directiva, las siguientes:

7.1 Reglas procedimentales:

- Autoridades competentes del procedimiento administrativo disciplinario.
- Etapas y fases del procedimiento administrativo disciplinario y plazos para la realización de actos procedimentales.
- Formalidades previstas para la emisión de los actos procedimentales.
- Reglas sobre actividad probatoria y ejercicio del derecho de defensa.
- Medidas cautelares.
- Plazos de prescripción.

7.2 Reglas sustantivas:

- Los deberes y/u obligaciones, prohibiciones, incompatibilidades y derechos de los servidores.
- Las faltas.
- Las sanciones: tipos, determinación graduación y eximentes".



¹⁷Directiva № 02-2015-SERVIR/GPGSC - "Régimen Disciplinario y Procedimiento Sancionador de la Ley № 30057, Ley del Servicio Civil", aprobada por la Resolución de Presidencia Ejecutiva № 101-2015-SERVIR-PE

- (ii) Reglas sustantivas: Los deberes y/u obligaciones, prohibiciones, incompatibilidades, y derechos de los servidores, así como faltas y sanciones.
- 23. En ese sentido, se debe concluir que a partir del 14 de septiembre de 2014, las entidades públicas con trabajadores sujetos a los regímenes regulados por el Decreto Legislativo № 276, Decreto Legislativo № 728 y Decreto Legislativo № 1057 deben aplicar las disposiciones, sobre materia disciplinaria, establecidas en el Título V de la Ley del Servicio Civil y el Título VI del Libro I de su Reglamento General, siguiendo las reglas procedimentales mencionadas en los numerales precedentes.
- 24. En el presente caso, de la documentación que obra en el expediente administrativo se advierte que el impugnante se encontraba sujeta al régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 728, y los hechos que motivaron se le inicie procedimiento administrativo disciplinario ocurrieron con posterioridad de la vigencia del régimen disciplinario de la Ley del Servicio Civil (el 14 de septiembre de 2014); por tal motivo, son aplicables al caso las normas sustantivas y las normas procedimentales sobre el régimen disciplinario establecidas en la Ley del Servicio Civil y su Reglamento General.

<u>De la observancia del debido procedimiento administrativo, el principio de legalidad y tipicidad</u>

- 25. El numeral 3 del artículo 139º de la Constitución Política del Perú establece, como principio de la función jurisdiccional, la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado que estos principios "(...) no sólo se limitan a las formalidades propias de un procedimiento judicial, sino que se extiende a los procedimientos administrativos sancionatorios. En efecto, el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. (...)"18.
- 26. En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional manifiesta que "(...)el derecho reconocido en la referida disposición "(...) no sólo tiene una dimensión, por así decirlo, "judicial", sino que se extiende también a sede "administrativa" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente



¹⁸Fundamento 2º de la Sentencia emitida en el expediente № 02678-2004-AA.

jurisdiccional (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8º de la Convención Americana (...)"19.

- 27. Por su parte, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley Nº 27444, reconoce a los administrados el goce de los derechos y garantías del debido procedimiento administrativo, que comprende de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten²⁰.
- 28. En el caso de los procedimientos administrativos disciplinarios, como el que concita el presente análisis, la exigencia del respeto irrestricto de tales derechos y garantías adquiere una dimensión mayor, toda vez que en ellos "los derechos de los administrados son más profundamente influidos por la decisión de la Administración"²¹.
- 29. Por su parte, el numeral 1.1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley № 27444²² establece que el procedimiento administrativo se sustenta, entre

La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo".



¹⁹Fundamento 3º de la sentencia emitida en el expediente № 2659-2003-AA/TC.

²⁰Texto Único Ordenado de la Ley № 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo № 004-2019-JUS

[&]quot;Artículo IV.-Principios del procedimiento administrativo

^{1.} El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (...)

^{1.2.} Principio del debido procedimiento.- Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

²¹RUBIO CORREA, Marcial. *El Estado Peruano según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional*. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. 2006. p. 220.

²²Texto Único Ordenado de la Ley № 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo № 004-2019-JUS

[&]quot;Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo

otros, en el principio de legalidad, según el cual, "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas".

- 30. Al respecto, se debe precisar que, a diferencia de lo que sucede con los particulares, a quienes rige el principio de autonomía de la voluntad²³, en aplicación del principio de legalidad, la Administración Pública solo puede actuar cuando se encuentra habilitada por norma legal específica. En otros términos, mientras que los particulares están habilitados de hacer todo lo que la ley no prohíbe, las entidades que integran la Administración Pública, solo pueden hacer lo que la ley expresamente les permita.
- 31. En relación con el mencionado principio, Morón Urbina precisa que éste se desdobla en tres elementos esenciales e indisolubles: "(...) la legalidad formal, que exige el sometimiento al procedimiento y a las formas; la legalidad sustantiva, referente al contenido de las materias que le son atribuidas, constitutivas de sus propios límites de actuación; y la legalidad teleológica, que obliga al cumplimiento de los fines que el legislador estableció, en la forma tal que la actividad administrativa es una actividad funcional"²⁴.
- 32. En ese sentido, al momento de emitir un acto administrativo, las autoridades administrativas deben actuar conforme al marco legal vigente, teniendo en cuenta que sus declaraciones producen efectos jurídicos respecto del interés, obligación o derecho de un administrado, tal como se encuentra previsto en el artículo 1º del TUO de la Ley Nº 27444²5.
 - 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:
 - 1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas".

"Artículo 2º.- Derechos fundamentales de la persona

Toda persona tiene derecho:

(...)

24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia:

۱ ۱

- a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe;(...)".
- ²⁴Morón Urbina, Juan Carlos. *"Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General"*. Décima Edición. Publicado por Gaceta Jurídica. Febrero 2014. p.64.
- ²⁵Texto Único Ordenado de la Ley № 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo № 004-2019-JUS



²³Constitución Política del Perú de 1993

- 33. En tal sentido, es posible afirmar que las entidades públicas, al emitir un acto administrativo, deben hacerlo cumpliendo el ordenamiento jurídico y siguiendo los procedimientos previamente establecidos para la consecución de tal fin, de lo contrario se estaría vulnerando el principio de legalidad y, por ende, el debido procedimiento administrativo.
- 34. En relación al principio de legalidad y a la tipificación de las conductas sancionables o infracciones, los numerales 1 y 4 del artículo 248º del TUO de la Ley Nº 27444²⁶ señalan que solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado; y que solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de legal mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva u análoga.
- 35. Por lo que las entidades solo podrán sancionar la comisión de conductas que hayan sido previamente tipificadas como ilícitas, mediante normas que describan

"Artículo 1º. -Concepto de acto administrativo

1.1 Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta (...)".

²⁶Texto Único Ordenado de la Ley № 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo № 004-2019-JUS

"Artículo 246º.- Principios de la potestad sancionadora administrativa

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales:

- 1. Legalidad.- Sólo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado, las que en ningún caso habilitarán a disponer la privación de libertad. (...)
- 4. Tipicidad.- Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras".



de manera clara y específica el supuesto de hecho infractor y la sanción aplicable²⁷.

- 36. Asimismo, respecto al principio de legalidad y tipicidad, el Tribunal Constitucional ha señalado que "(...) el primero, se satisface cuando se cumple con la previsión de las infracciones y sanciones en la ley, mientras que el segundo, se constituye como la precisa definición de la conducta que la ley considera como falta, resultando éste el límite que se impone al legislador penal o administrativo, a efectos de que las prohibiciones que definen sanciones, sean éstas penales o administrativas, estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción de una determinada disposición legal"²⁸.
- 37. En consecuencia, por el principio de tipicidad, el cual constituye un límite a la potestad sancionadora, se debe precisar cuál es la conducta que se considera como falta administrativa, disciplinaria o penal. En ese sentido, existe una obligación por parte de las entidades públicas, tanto al momento de iniciar un procedimiento administrativo disciplinario, como al momento de resolver la imposición de una sanción, de señalar de manera expresa cuál es la norma o disposición que se ha incumplido. Asimismo, se debe precisar cuál es la correspondiente falta que se ha cometido, la misma que debe tener correlato con la sanción a imponerse.
- 38. Considerando lo expuesto, corresponde señalar que el principio de tipicidad no se satisface únicamente cuando la Entidad cumple con la imputación de una falta administrativa al administrado, sino que los hechos imputados deben subsumirse en los supuestos previstos en la norma jurídica, cumpliendo cabalmente con el ejercicio de subsunción, caso contrario, si los hechos no se configuran en la norma jurídica imputada, no dará lugar a las consecuencias jurídicas previstas en el ordenamiento jurídico.

Sobre la adecuada imputación del Código de Ética de la Función Pública

39. Ahora bien, de la revisión de la documentación que obra en el expediente administrativo se aprecia que, mediante Carta № 01-SCPO-DIDAECCV-DIR-INCOR-ESSALUD-2021, se dispuso el inicio de procedimiento administrativo disciplinario



²⁷VERGARAY, Verónica y GÓMEZ APAC, Hugo, La Potestad Sancionadora y los Principios del Derecho Sancionador. En: Sobre la Ley del Procedimiento Administrativo General, Libro Homenaje a José Alberto Bustamante Belaunde. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Lima-2009. Pág. 403.

²⁸Fundamento 11 de la Sentencia emitida por el Tribunal Constitucional en el expediente № 06301-2006-AA/TC.

al impugnante, atribuyéndole la infracción del principio de probidad y el deber de responsabilidad previstos en la Ley Nº 27815, y la comisión de la falta tipificada en el literal q) del artículo 85º de la Ley Nº 30057, en concordancia con lo establecido en el artículo 100º del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil.

- 40. En ese sentido, mediante Resolución de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos № 001-DIR-INCOR-ESSALUD-2021, el impugnante fue sancionado con suspensión por trescientos sesenta y cinco (365) días sin goce remuneraciones al acreditarse que no respetó en reiteradas oportunidades el aislamiento voluntario al cual se acogió el 17 de marzo de 2020 mediante declaración jurada en mérito al estado de emergencia, toda vez que el domingo 22 de marzo de 2020 fue detenido conjuntamente con otros dirigentes en plena conferencia de prensa, el 25 de abril publicó en el SINAMSOOP-ESSALUD, una foto donde sale conjuntamente con el congresista de iniciales J.L.P.F. informando que han presentado el proyecto de Ley 5070/2020, el 27 de abril participó activamente del plantón realizado por el Sindicato SINAMSSOP del cual forma parte en la puerta principal del Hospital Luis Negreiros ubicado en la Provincia Constitucional del Callao y el 29 de abril, en su calidad de Secretario General del Sindicato, presentó una denuncia ante el Ministerio Público en la que acusa a la Presidenta Ejecutiva de la Entidad por presunto abandono o exposición al contagio y muerte.
- 41. Al respecto, resulta necesario precisar que en la Décima Disposición Complementaria Transitoria de la Ley № 30057 se señaló textualmente lo siguiente:

"DÉCIMA.- Aplicación del régimen sancionador y proceso administrativo disciplinario

A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley, los procesos administrativos disciplinarios en las entidades públicas se tramitan de conformidad con lo estipulado en la presente Ley y sus normas reglamentarias. El Código de Ética de la Función Pública, Ley 27815, se aplica en los supuestos no previstos en la presente norma.

Queda prohibida la aplicación simultánea del régimen disciplinario establecido en la presente Ley y la Ley del Código de Ética de la Función Pública o su Reglamento, para una misma conducta infractora, en el mismo procedimiento administrativo disciplinario. (...)". (Subrayado nuestro).

42. Como se puede apreciar de la norma citada, a partir de la vigencia del régimen disciplinario regulado por la Ley Nº 30057, el legislador ha prohibido la imputación



simultánea en un mismo procedimiento administrativo de las normas que regulan el régimen disciplinario de la Ley Nº 30057 y de las normas previstas en la Ley Nº 27815 para una misma conducta infractora. Asimismo, ha precisado que la aplicación de la Ley Nº 27815 está restringida a los supuestos no regulados por la Ley Nº 30057.

- 43. Si bien a través del artículo 100º del Reglamento General de la Ley Nº 30057 se ha señalado que también constituyen faltas para efectos de la responsabilidad administrativa disciplinaria las previstas en la Ley Nº 27815, las cuales se procesan conforme a las reglas procedimentales señaladas en régimen disciplinario y procedimiento sancionador regulado en la Ley Nº 30057 y su Reglamento General, la misma debe interpretarse en concordancia con lo establecido en la Décima Disposición Complementaria Transitoria de la Ley Nº 30057.
- 44. Precisamente, mediante la Resolución de Sala Plena № 006-2020-SERVIR/TSC²⁹ se emitió el precedente administrativo de observancia obligatoria sobre la adecuada imputación de las infracciones a la Ley № 27815, en el marco del procedimiento administrativo disciplinario de la Ley № 30057, en su numeral 34, precisa lo siguiente:
 - "(i) La Ley Nº 27815 se aplica en los supuestos no regulados por la Ley Nº 30057. Si bien a través del procedimiento administrativo disciplinario de Ley del Servicio Civil se reconoce como faltas a las infracciones administrativas de la Ley Nº 27815, esta aplicación es de carácter residual, es decir, en tanto la Ley Nº 30057 no contenga expresamente el supuesto de la falta que se pretenda imputar. (...)". Resaltado es nuestro.
- 45. En ese sentido, de la revisión de la Resolución de Oficina de Gestión de Recursos Humanos № 001-DIR-INCOR-ESSALUD-2021, del 2 de marzo de 2021, se observa que la Jefatura de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la Entidad, sustenta su posición de sancionar al impugnante, indicando argumentos como:

"Que, en efecto, en mérito de la Declaración Jurada del 17 de marzo 2020 suscrita por el servidor Teodoro José Quiñonez Sánchez afirmando su estado de vulnerabilidad al riesgo de contraer el coronavirus, se le otorgó la licencia con goce de haber compensable para que permanezca en su domicilio y evite el riesgo de contagio; documento que sirvió de sustento para el pago de las remuneraciones respectivas sin acudir a laborar; pues, de no haber contado con dicho documento, el profesional de la salud se habría encontrado obligado de asistir a su centro de



²⁹Publicado el 4 de julio de 2020 en el Diario Oficial "El Peruano".

labores para brindar los servicios esenciales de atención médica especializada a los pacientes de INCOR, toda vez que no contaba con documento que le autorice a ausentarse de su centro de labores; por lo tanto, el mérito de dicha Declaración Jurada, le imponía la obligación de hacer uso de la licencia con goce de haber para el fin que fue concedida, que es el de mantenerse en cuarentena en su domicilio para proteger su salud evitando el riesgo de contagio; y no participar en reuniones presenciales con otros representantes gremiales y medios de prensa, representantes congresales y otros trabajadores, sin considerar que entre ellos podrían haber personas portadoras del virus y generar contagios masivos, contraviniendo las disposiciones del gobierno, respecto a las restricciones de la libertad de reunión y de libre tránsito; para evitar la propagación del coronavirus (...)". (Sic). Resaltado es nuestro.

- 46. Lo expuesto por la Entidad, encuentra sustento en el numeral 20.2 del artículo 20º del Decreto de Urgencia № 026-2020, la cual permite otorgar licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior, cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto. Del mismo modo, la Resolución de Gerencia General № 480-GG-ESSALUD-2020 permite al trabajador de riesgo suscribir la declaración jurada de acogerse al aislamiento social obligatorio por factor de riesgo, como el suscrito por el impugnante el 17 de marzo de 2020.
- 47. En ese sentido, en el presente caso se observa que la Entidad le atribuyó hechos relacionados a un presunto uso indebido de la licencia con goce de haber otorgada por ser personal que pertenece al grupo de riesgo según su declaración jurada, conducta infractora que se encuentra prevista como falta en el literal a) del numeral 98.2 del artículo 98º del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil.
- 48. Sin perjuicio de lo anteriormente mencionado, es pertinente mencionar que, la Entidad atribuyó al impugnante la infracción del principio de probidad y el deber de responsabilidad contemplados en la Ley del Código de Ética de la Función Pública, sin precisar de qué forma la conducta del impugnante vulneró tales normas, pues la sola mención de las mismas no resultan ser suficientes para satisfacer el principio de tipicidad, más aún cuando se tratan de normas que van a complementar una falta remisiva como la tipificada en el literal q) del artículo 85º de la Ley del Servicio Civil; por ello, resulta importante efectuar una correcta subsunción de los hechos con las normas infringidas para evidenciar la responsabilidad del impugnante.
- 49. Por lo tanto, corresponde a la Entidad reevaluar el cargo imputado de acuerdo a los elementos probatorios que cuenta, sin perjuicio de actuar otras documentales que considere pertinente, con la finalidad de adecuar correctamente el hecho y



tipificar la falta, teniendo en consideración que la Ley del Código de Ética de la Función Pública se aplica únicamente en los supuestos no regulados en la Ley del Servicio Civil, es decir, es de carácter residual. Y, en caso considere, que los hechos imputados no se subsumen en la falta del literal a) del numeral 98.2 del artículo 98º del Reglamento General de la Ley del Servicio Civil, deberá sustentar con mayor suficiencia y precisión como tales hechos suponen la vulneración de los principios y deberes éticos y no en la aludida falta.

- 50. En tal sentido, la Carta № 01-SCPO-DIDAECCV-DIR-INCOR-ESSALUD-2021, del 21 de enero de 2021, y la Resolución de Oficina de Gestión de Recursos Humanos № 001-DIR-INCOR-ESSALUD-2021, del 2 de marzo de 2021, deben ser declaradas nulas por incurrir en la causal prevista en el numeral 1 del artículo 10º del TUO de la Ley № 27444³0, por contravenir el numeral 14 del artículo 139º de la Constitución Política del Perú, y los numerales 1 y 2 del Artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley № 27444.
- 51. Finalmente, esta Sala estima que habiéndose constatado la vulneración del principio de tipicidad y, en consecuencia, el debido procedimiento en el proceso administrativo disciplinario seguido al impugnante, deviene en innecesario pronunciarse sobre los argumentos esgrimidos en su recurso de apelación sometido a conocimiento.
- 52. Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, este Tribunal debe reiterar que la nulidad declarada en la presente resolución no significa un pronunciamiento que genere impunidad en los hechos materia de imputación contra el impugnante, toda vez que su responsabilidad será determinada en el procedimiento administrativo disciplinario a cargo de la Entidad, para lo cual se deberá respetar el debido procedimiento administrativo, como garantía de todo administrado, siguiendo los criterios señalados en los párrafos precedentes.

En ejercicio de las facultades previstas en el artículo 17º del Decreto Legislativo Nº 1023, la Segunda Sala del Tribunal del Servicio Civil;

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:



³⁰Texto Único Ordenado de la Ley № 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo № 004-2019-JUS

[&]quot;Artículo 10º.- Causales de nulidad

^{1.} La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias (...)".

RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar la NULIDAD de la Carta № 01-SCPO-DIDAECCV-DIR-INCOR-ESSALUD-2021, del 21 de enero de 2021, y de la Resolución de Oficina de Gestión de Recursos Humanos № 001-DIR-INCOR-ESSALUD-2021, del 2 de marzo de 2021, emitidas por el Jefatura del Servicio Perioperatorio y por la Jefatura de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, respectivamente, del INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR; por haberse vulnerado el principio de tipicidad y el debido procedimiento.

SEGUNDO.- Retrotraer el procedimiento administrativo al momento de la precalificación de la falta a cargo de la Secretaría Técnica del INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR, debiendo tener en consideración al momento de calificar la conducta, los criterios señalados en la presente resolución.

TERCERO.- Notificar la presente resolución al señor TEODORO JOSE QUIÑONES SANCHEZ y al INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR, para su cumplimiento y fines pertinentes.

CUARTO.- Devolver el expediente al INSTITUTO NACIONAL CARDIOVASCULAR, debiendo la entidad considerar lo señalado en el artículo 11º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.

QUINTO.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal Institucional (www.servir.gob.pe).

Registrese, comuniquese y publiquese.

MIRIAM ISABEL PEÑA NIÑO

VOCAL

GUILLERMO JULIO MIRANDA HURTADO PRESIDENTE RØSA MARIA VIRGINIA ĆARRILLO SALAZAR VOCAL

L2/P4